

América Latina ante dos destinos democráticos diferentes

NICOLÁS LYNCH

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
nlynchg@unmsm.edu.pe

RESUMEN

Existe un equivocado dilema académico y político, impulsado desde la derecha, al momento de caracterizar la actualidad y el rumbo de América Latina entre la democracia o dictadura como únicos horizontes posibles. En contraposición, el autor sostiene que la disputa se encuentra entre las democracias de élite y las democracias sociales. A partir de ello, describe los procesos políticos de las últimas décadas en la región y se plantea posibles horizontes democráticos.

Palabras claves: Democracia, dictadura, democracias de élite, democracias sociales.

Two different democratic destinies before Latin America

ABSTRACT

There exists an erroneous academic and political dilemma, propelled by the right, when characterizing the current course of Latin America as one that sits between democracy and dictatorship as the only political horizons possible for the continent. On the contrary, the author affirms that this dispute is actually between elite democracies and social democracies. From this point, the author describes the political processes of the last decades in the region and proposes possible democratic horizons.

Key words: Democracy, dictatorship, elite democracies, social democracies.

1. El dilema equivocado

El dilema político hoy en América Latina se quiere plantear igual que hace cuarenta años: ¿democracia o dictadura? Creo, sin embargo, que esta no es la opción. La disputa está entre dos caminos democratizadores: las democracias de élite que nos trajeron las transiciones y las democracias sociales que vinieron con el giro a la izquierda. Estos son los procesos que señalan caminos alternativos en la región.

Pero el dilema entre «democracia o dictadura» no es solamente académico, sino también político. Este dilema es impulsado por la derecha y el inmenso poder mediático, nacional e internacional que la sustenta, lo que ha permitido que persista, a pesar de sus derrotas, como el discurso hegemónico. Su objetivo es establecer una identidad entre democracia y democracia de élite, para pretender de esta manera un monopolio conceptual y a la vez histórico, ya que apuntan a señalar su concepto de democracia como el único existente y a sacralizar el proceso de las transiciones como aquel que trajo la democracia a la región en las décadas de 1970 y 1980. Y también tienen un objetivo político de corto plazo, que es señalar como dictaduras a los gobiernos que no siguen los preceptos de la democracia liberal representativa, a los que acusan en un primer momento de plantear una dictadura de mayoría y luego alguna variedad de gobierno autoritario o de dictadura simple y llana.

La segunda opción, como la disputa entre dos caminos democratizadores, tiene una estirpe diferente. Establece la pluralidad de conceptos democráticos y, a diferencia del liberal, afirma la existencia de uno distinto: el social. Distinguiéndose del primero, reniega del contenido únicamente instrumental del régimen político y plantea el objetivo sustantivo del mismo. Asimismo, reivindica el fondo histórico señalando sus orígenes en el proceso democratizador en América Latina que se remonta a la lucha antioligárquica. De igual forma, reclama un objetivo explícito: una democracia mayoritaria, por encima de los vericuetos de la división de poderes, que haga caso a las mayorías electorales que eligen gobiernos populares en la región.

Desde esta controversia democrática hay que mirar el futuro. Por ello, creo que marchamos a un fin de ciclo para la democracia que inauguró las transiciones en los países en que esta sobrevivió y un fin de ciclo para la democracia que dio vida al giro a la izquierda en aquellos países donde este ocurrió. La experiencia vivida ha sido de tal magnitud y, a la vez, ha alcanza-

do tales límites que podríamos estar viviendo los prolegómenos de un nuevo momento democrático, ojalá que progresista.

2. Mirar desde el sur

¿Qué permite ver el momento político en América Latina como una disputa entre dos proyectos alternativos de democracia? Pues una operación epistemológica especial: mirar desde el sur. Hay que cambiar el punto de mira del eurocentrismo reinante también en la teoría democrática.

Este mirar desde el sur supone para empezar una definición situacional. Nuestro lugar en el mundo es América Latina y este es un espacio que nació como territorio colonial. A partir de allí establece un proceso de dependencia estructural con sucesivos centros de poder planetario, que solo se transforma parcialmente con la independencia que configuran nuestras repúblicas y que luego entra en un largo conflicto entre democratización y autoritarismo que no termina hasta nuestros días. En este proceso es que la región adopta un nombre y busca una identidad.

La dependencia colonial determina en dos sentidos América Latina: como dependencia externa de poderes imperiales extranjeros y como el establecimiento de relaciones sociales de carácter colonial al interior de los diferentes países, los que tienen en el factor racial una cuestión central (Quijano, 2011). La dependencia externa vuelve nuestras economías productoras de materias primas al servicio del desarrollo capitalista global e importadoras de mercancías de los países centrales; de esta forma, configura un intercambio desigual que hace imposible nuestro desarrollo. No hay enigma sobre un supuesto continente olvidado (Reid, 2009), sino brutal dependencia que se renueva con el neoliberalismo.

Asimismo, la persistencia de relaciones coloniales en nuestras sociedades que lastran la democratización y fragmentan espacios y relaciones sociales lleva a muchos a pensar que lo diverso anula las posibilidades de unidad e identidad. Por el contrario, si tomamos una perspectiva crítica frente al proceso histórico de avances y retrocesos y se plantea un proyecto de democracia y autonomía hacia el futuro, la región encuentra su lugar en el mundo ya no dividida como provincias de un imperio, sino como una unidad en la diversidad latinoamericana que puede tener un lugar propio y no subalterno en el mundo globalizado. Algo de esto ocurrió en América Latina entre 1998 y 2016 —por

ello la importancia de los gobiernos de izquierda—, y en ello jugó un papel central la democratización y su plasmación en democracia.

Esta mirada se da a contrapelo de la visión eurocéntrica que señala que solo la democracia liberal es democracia. Aquel punto de vista que optimistamente señala Francis Fukuyama (1992) luego del colapso de la Unión Soviética como «el fin de la historia» y que nos incluye en «la tercera ola» de la que hablaba Samuel Huntington (1991) en la misma época. Para esta visión, difundida principalmente por la academia norteamericana y el gobierno de los Estados Unidos, se trata de medir a los demás países con el «parecido de familia» o patrón democrático promedio que se repite en los países capitalistas desarrollados (Nun, 2000).

Frente a esta visión eurocéntrica, ver desde nuestra América significa ver desde la historia de la democratización fundamental, como dice Carlos Vilas (1995); es decir, desde la democratización social que se desata con la lucha antioligárquica en la primera mitad del siglo XX. Esto quiere decir proceder al análisis desde nuestra experiencia democratizadora por descolonizar nuestras sociedades. Mirar lo que la democratización nos brinda como regímenes políticos participativos y representativos para ver si existe una consulta crecientemente democrática entre los que manejan el Estado y el conjunto de la población sobre las decisiones que afectan a todos (Tilly, 2007).

Enfrentamos, sin embargo, un bloqueo epistemológico. Desde el sur de América, y específicamente desde el Perú, el análisis vuelve a estar atrapado en el presentismo; es decir, en tratar de dar cuenta de lo que sucede en la actualidad o a lo sumo desde 1974 (Huntington, 1991), fecha que se considera para la perspectiva liberal (y su aupamiento neoliberal) como el inicio del último ciclo democrático. Para esta visión, la democracia es entendida como el modelo importado del mundo occidental desarrollado, su estudio como el fenómeno que aparece ante nuestros ojos y el análisis violentamente restringido a la conducta de los actores. Si lo ponemos en términos del dilema que plantea Juan Linz, en 1978, se trata de anteponer el cómo suceden los fenómenos políticos al porqué de los mismos.

El presentismo es entonces la temporalidad del discurso hegemónico. Las cosas no existen fuera del momento presente. La historia no es tomada en cuenta, no solo para la definición de la democracia en nuestra región, sino tampoco para el concepto de democracia que ya nos traen armado para el análisis. Es el fondo histórico de algo distinto. Frente a una supuesta normalidad presentamos una historia, lo que nos permite observar la cuestión

democrática en una luz diferente; pero, sobre todo, cambia el lugar desde donde se mira. Ya no es el eterno presente visto desde un lente importado, extraño al fin y al cabo para mirar. Ahora se trata de situarnos en nuestra construcción histórica.

Sin embargo, la democracia necesita agencia para poder funcionar. Esta es de crucial importancia, porque de su represión o impulso depende la democratización o la regresión democrática de un determinado país. Aquí, como en tantos otros puntos sobre el tema, existe un muy importante debate entre los que afirman la ciudadanía como agencia principalmente individual (Mainwaring y Pérez Liñán, 2013; O'Donnell, 2010), que se proyecta en personalidades y/o conjuntos de personalidades que se agrupan en diversas instituciones o partidos, y los que afirmamos además la existencia de intereses sociales, muchas veces expresados en clases que generan acción colectiva y movimientos sociales (Bottomore, 1992). Si estos colectivos de intereses tienen éxito, influyen en la competencia y el conflicto político mismos entrando en la disputa por la agregación y articulación de intereses que desarrollan los partidos políticos.

El debate sobre la agencia fue importante en la época de las transiciones a la democracia. Mientras que los impulsores de la teoría de las transiciones ponían el énfasis en los ciudadanos como individuos y en las personalidades políticas, ya fueran gobernantes u opositores (O'Donnell y Schmitter, 1986), sus críticos (Collier, 1999) resaltaban el papel de los colectivos y especialmente los trabajadores en los procesos de transición y en la construcción de la ciudadanía. En concreto, para el caso peruano desarrollé el libro *La transición conservadora* (Lynch, 1992), donde analicé el papel de los sindicatos obreros y los frentes regionales en la transición democrática del Perú, en la segunda mitad de la década de 1970. Allí puntalicé cómo fue que los grandes paros nacionales de 1977 y 1978 decidieron que los militares inicien la transición, pero cómo, asimismo, las dirigencias de los partidos tradicionales pactaron rápidamente con estos últimos y tomaron el control del proceso. De igual forma, este debate incide en la valoración distinta que se tiene sobre la movilización popular en relación con la consolidación democrática. Mientras que las posiciones nacional populares suelen valorar las movilizaciones como un elemento democratizador, los liberales optan por tomarlas como una herramienta autoritaria de movimientos y/o regímenes caudillistas. Por ello, en este último tiempo, cuando se contrastan opciones democráticas, la agencia —individual o colectiva— vuelve a estar en el centro del debate.

El dilema sobre la valoración de la agencia se convierte en central en la disputa democrática por el papel protagónico que tuvieron los movimientos sociales en la llegada y consolidación del giro a la izquierda. Lo nuevo en la democracia social o de mayorías que intenta este giro tiene en los movimientos, y más específicamente en la sociedad movilizadora, su apoyo clave. Asimismo, las dificultades en la relación movimientos-gobiernos de izquierda va a ser también factor de su crisis. Igualmente, desde la derecha, la sociedad movilizadora será el ogro que demuestra *per se* el carácter autoritario del giro, para luego oportunistamente allí donde se producen movilizaciones en contra de los gobiernos de izquierda, como ha sido el caso del Brasil, verlos como sus salvadores.

Por otra parte, ver la realidad desde el Perú es especialmente aleccionador. En este país hemos tenido, en el último cuarto de siglo, la instauración, primero en dictadura y luego en democracia, del modelo económico neoliberal y de un régimen político en cada momento a su servicio. Por contraste entonces con buena parte de los fenómenos ocurridos, tenemos también un punto de mira especial sobre la democracia en la región.

3. ¿Cómo se expresa esto en América Latina?

Es fundamental el cambio de época mundial para situarnos en el actual debate y disputa por la democracia. Desde la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín en 1989, el parteaguas en la política, según las fuerzas no solo de izquierda sino de centroizquierda y nacional populares en general, no se daba en torno a la democracia sino al cambio social. Tal era la preocupación que esta causaba que uno de los máximos teóricos del imperio norteamericano en esa época, Samuel Huntington (1968), puesto en la disyuntiva sobre cuál era la prioridad en las sociedades en desarrollo, si el cambio o el orden, se manifestó inequívocamente por el segundo; señaló así las graves perturbaciones que causaba el afán de cambio. Además, en la mayor parte de los casos se consideraba que este último solo era posible por la vía de la revolución armada; las experiencias mexicana, boliviana, cubana y nicaragüense estaban allí para demostrarlo. El intento de Allende de hacer un cambio en democracia le costó la vida a él y a miles de sus compatriotas. El propio peronismo, más allá de los avances logrados, pagó cara su osadía con sucesivas represiones y miles de muertos.

Pero de 1989 en adelante, al caer el muro de Berlín y luego desaparecer la Unión Soviética y quedar una sola superpotencia, cambiaron los términos del debate. Cualquier propuesta política, la de transformación social incluida, debe darse dentro de un régimen democrático de pluralismo y competencia entre diversas opciones para que tengan legitimidad entre la población, así como a nivel regional y global. En otras palabras, el conflicto ha pasado a ser parte de dos propuestas que se dicen democráticas: una para negar el cambio social y otra para promoverlo.

La inclusión del pluralismo político como una característica clave para renovar la perspectiva nacional popular o el populismo inicial la plantea Juan Carlos Portantiero y Emilio De Ípola (1981) en un artículo seminal sobre el problema varias décadas atrás. Allí señalan que la perspectiva organicista del populismo en América Latina con la que pretende constituir al pueblo como sujeto y reificarlo en el Estado —donde el caso paradigmático es el peronismo— debe ser reemplazada por una perspectiva plural. Retomar el pluralismo, entonces, para Portantiero y De Ípola significa evitar el estatalismo presente en la propuesta populista y su proyección en la voluntad inapelable del líder que suele devenir en diversas variedades de autoritarismo, tanto en el movimiento social como en el ejercicio del gobierno.

En este debate hay también quien absolutiza el paradigma democrático liberal, como es el caso de Kurt Weyland (2013), quien considera una amenaza para la democracia en su conjunto a los gobiernos que protagonizaron el giro a la izquierda en la región, especialmente Venezuela, Ecuador y Bolivia. El cambio institucional para hacer posible los cambios sociales propuestos, como fueron las nuevas constituciones que aprobaron las asambleas en los países señalados, habrían sido maniobras autoritarias de los gobernantes. No importa si estas constituciones fueron aprobadas en su momento por abrumadoras mayorías populares. Aquí se pone el principio liberal de limitación del poder del Estado por encima del principio democrático de la soberanía popular, que es a la postre el origen del orden democrático en la sociedad moderna.

Esta es una tensión central de la propuesta nacional popular, tanto antes como ahora. Por ello, es pertinente señalar que la preocupación de Weyland puede concretarse en Venezuela. Cabe, por ello, hacer una acotación al proceso constituyente del 2017 en ese país, en curso cuando se escriben estas líneas. Allí, a diferencia del proceso constituyente que convocara el gobierno naciente de Hugo Chávez en 1998, no se han respetado plenamente ni los principios de soberanía popular ni de pluralismo político, lo que cues-

tiona seriamente su carácter democrático. El primero, de soberanía popular, porque no se ha consultado en referéndum a la ciudadanía, como sí lo hizo Chávez en su momento, sobre la necesidad de la convocatoria constituyente; y el segundo, de pluralismo, porque dada la polarización política existente en Venezuela, la convocatoria no es el resultado de una negociación entre los actores en conflicto, sino una salida unilateral del gobierno de Maduro para sacar del juego político a la derecha.

A pesar de todo, la perspectiva de cambio para la transformación social dentro de los cauces democráticos aparece así como fundamental para los gobiernos nacional populares. Sin esta perspectiva pierden su razón de ser. Esta, sin embargo, es una discrepancia de fondo con el enfoque liberal, más todavía en su sesgo neoliberal que absolutiza el mercado. Para los liberales, los afanes transformadores deben subordinarse a los límites establecidos al poder del Estado, no importa si las reglas han sido cambiadas previa consulta popular. Esta discrepancia en torno al tema del cambio para la transformación está presente desde el principio del giro a la izquierda y servirá de base para el posterior calificativo de autoritarios a los gobiernos que se atreven a transformar en democracia, no importa si son escrupulosos en la consulta al soberano que es finalmente el pueblo.

Lo que vivimos hoy con la crisis de los gobiernos de izquierda es entonces el más reciente de los actos por definir el camino democrático de la región. En este caso se trata de la contraofensiva de las élites contra los avances populares desarrollados desde 1998 en adelante. No es una contraofensiva para imponer un régimen abiertamente autoritario, sino para retomar el proyecto de democracia restringida y represión a los movimientos sociales que se implantó con las transiciones y retrocedió frente al giro a la izquierda. Este último, asimismo, no ha sido, y no podía ser, una situación de blanco/negro, como en la época de las revoluciones. Ha sido un período reformista de avances, retrocesos y transacciones, pero con un norte de democratización, nacionalización e integración de y entre los países que entraron en ese proceso.

Frente a las interrogantes de ¿quién gobierna?, ¿qué han hecho los gobiernos de izquierda?, se diría que —sobre todo en sus primeros momentos— han sido fieles a sus electores. Son memorables las traiciones a los electores de Carlos Menem en la Argentina, en 1989, y de Alberto Fujimori en el Perú, en 1990, que dijeron una cosa en campaña y aplicaron, apenas llegados al poder, paquetazos neoliberales contras sus pueblos. Este gran cambio político de hacer lo que se dice fue especialmente resentido por los poderosos histórica-

mente acostumbrados a burlar o hacer burlar el veredicto popular cuando le era contrario a sus intereses.

En este sentido los gobiernos de izquierda, acorde con el origen de su poder, recuperaron la política y fortalecieron el Estado para hacer transformaciones en la sociedad. Esa centralidad, que el neoliberalismo había negado con los ajustes dándosele al mercado, empezó a regresar a la política. Ello ha permitido entender la democracia como producto de una relación entre la sociedad y el Estado en la que ciudadanos y colectivos adquieren derechos para constituirse como sujetos del régimen democrático. En este proceso, les dan protagonismo a los movimientos sociales y fortalecen a la sociedad organizada, tanto a favor como incluso en contra del gobierno mismo. Asimismo, desde el Estado suele desarrollarse una política económica de estímulo a la demanda y redistribución del ingreso, así como programas para combatir la desigualdad y la pobreza. Por último, se desarrolla también una autonomía en política exterior, especialmente de los Estados Unidos, e importantes iniciativas de integración regional para poder integrarnos colectivamente al mundo.

Una particularidad, sin embargo, de los gobiernos nacional populares es la prominencia del líder y la importancia que tiene este en la interpelación, de arriba hacia abajo, del pueblo movilizado. Este liderazgo, que suele ser carismático, empieza como una comunidad de creyentes que cree en las cualidades sobrenaturales del líder, pero corre el riesgo de convertirse en una comunidad, casi exclusivamente de clientes, atentos a la prebenda que viene desde el poder (Lynch, 2000; Weber, 1979). En esta tensión, entre creyentes y clientes, es que se mueve el liderazgo populista; así se desbroza el camino para producir transformaciones, pero a la vez se tienta al líder y su séquito inmediato con un acomodo perfecto que lo puede hacer pensar en la eternidad.

Un elemento decisivo en esta relación líder-pueblo movilizado es el discurso. Se trata de un discurso polarizante en el que los elementos ejes son pueblo-oligarquía y nación-imperialismo. Desde la orilla liberal se critica agriamente esta división porque se la considera opuesta al pluralismo que supone un «espacio de consenso» en el régimen político, aquel que permite llegar a acuerdos no solo coyunturales sino sistémicos o, más bien, constitutivos. El problema en América Latina es que, a pesar de las instituciones democráticas formales, persiste la contradicción pueblo-oligarquía y nación-imperialismo, en las condiciones de esta globalización y la hegemonía planetaria del neoliberalismo. Sin este discurso y su realización en políticas de

gobierno no se justificaría el afán transformador de quienes levantan banderas nacional populares.

La autonomía de los Estados Unidos había sido una bandera fundamental de los movimientos sociales que están en el origen de los gobiernos de izquierda y juega un rol central en el giro comentado, en especial en la lucha contra las iniciativas de libre comercio que había tenido ese país. Esta lucha tiene un hito en noviembre del 2005, en Mar de Plata (Argentina), en donde coincidieron la III Cumbre de los Pueblos con la IV Cumbre de Las Américas. Allí confluyeron movimientos sociales, presidentes y líderes regionales progresistas encabezados por el entonces presidente de la Argentina Néstor Kirchner. Este bloque rechazó la propuesta del entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush de establecer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El rechazo fortaleció a la naciente Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y al anterior MERCOSUR, lo que dio origen años más tarde a la CELAC. Todos estos organismos apuntaron a poner en práctica el objetivo de integración y autonomía regional, para proceder a una posterior integración global bajo la idea de que la soberanía de cada país necesitaba de la autonomía de la región para establecerse definitivamente.

Estas acciones, que tuvieron un motor en las acciones de los movimientos sociales contrarios al neoliberalismo, produjeron modificaciones de diferente tipo y magnitud, en cada caso, en el régimen político de los gobiernos de izquierda. Se fue de una política de ampliación de derechos en Argentina, Uruguay y Brasil a una política de refundación republicana en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, todos coincidieron en la urgencia de la autonomía y la integración regionales como una necesidad de cada uno de sus procesos nacionales. En los distintos casos se trató de cambios que profundizaron la democratización social y política, para quitarles o reducirles el poder a las élites que antes habían ostentado el mismo. Este cambio de manos de muchos recursos materiales y parte del poder del Estado es el motivo fundamental de la contraofensiva derechista.

4. El tiempo largo de la democratización

Ahora bien, esta contraofensiva derechista se entiende plenamente si la ubicamos en el tiempo largo de la democratización latinoamericana que va de la lucha antioligárquica al giro a la izquierda.

La lucha antioligárquica y su deriva en la organización de movimientos populistas o nacional populares y de izquierda, que en algunos casos llegan a ser gobierno, significa el primer gran momento democratizador moderno en la región que transcurre aproximadamente entre 1930 y 1980. Su demanda inclusiva de reclamar el voto para toda la población adulta masculina y las demandas de acción estatal, justicia social y soberanía nacional va a significar un cambio radical frente a la exclusión oligárquica y una democratización al promover la participación, vía la movilización y la organización, de importantes sectores de la población. Se trata, sin embargo, de una participación que no siempre culmina en representación política y cuando los movimientos nacional populares, en esta primera etapa, llegan al gobierno suelen caracterizarse por su autoritarismo. La democratización, por ello, se da principalmente en el plano social, como una demanda de igualdad que se empieza a plasmar en derechos, pero que es débil en los planos civil y político.

Las transiciones a la democracia de las décadas de 1970 y 1980, que se dan como respuesta a las dictaduras militares de la época que con matices significativos recorren América Latina, son el segundo momento democratizador. A diferencia del primer populismo, son transiciones a democracias representativas de tipo liberal, con reconocimiento de derechos civiles y políticos, pero recorte e incluso abolición de los derechos sociales. Como señalamos, coinciden en el tiempo con la crisis de la deuda que tiene como respuesta la receta neoliberal, sintetizada en el Consenso de Washington. Son democratizadoras, sin embargo, porque recuperan la democracia electoral y los derechos humanos frente al horror de las dictaduras militares. Ese aspecto liberal del régimen democrático despertaría en su momento una adhesión mayoritaria, porque establecía o devolvía derechos que las dictaduras negaban. No obstante, su negativa a acoger los derechos sociales que estaban firmemente asentados en varios países en el momento anterior de la democratización tiene como explicación, tal como insistiría Carlos Franco, el terrorismo de Estado practicado por los militares que los actores políticos de derecha blandían como amenaza y los de centro e izquierda no querían arriesgar a repetir.

Pero esta contradicción en el proyecto de las transiciones las lleva al fracaso, para impedir que pasen luego de la elección de un gobierno democrático al momento de la consolidación del régimen. Es lo que he denominado la «falacia de la consolidación» (Lynch, 2009). En la teoría de las transiciones (Schmitter y O'Donnell, 1986) se suponía que luego de una primera etapa de la transición, con la elección de un gobierno en elecciones limpias, se iniciaba

una segunda etapa de consolidación del régimen democrático. La consolidación se debía caracterizar por la estabilidad y estaba dada porque la democracia se reconocía como la única vía para hacer política por parte de los actores involucrados. Sin embargo, la región se caracteriza porque las democracias no se consolidan luego de las transiciones, justamente porque buena parte de los actores en juego no consiguen satisfacer sus demandas, especialmente de bienestar social, con esta democracia de carácter liberal, restringida a los derechos individuales y políticos. Producto de este fracaso de la consolidación liberal es que surge el giro a la izquierda.

Pero existen autores que van más allá. Ya Norberto Bobbio en su clásico *Liberalismo y democracia* (1992) señala que el paradigma democrático liberal se forma en la convergencia, no siempre cómoda, entre liberalización y democratización. Sin embargo, a partir de la crisis capitalista de 1973, y más precisamente de la caída del muro de Berlín en 1989, se produce también un grave retroceso. La soberanía popular retrocede frente a la libertad de mercado. Esto lo señala Juan Carlos Monedero (2017) cuando dice que la democracia en los tiempos de neoliberalismo ha dañado el paradigma mismo de la democracia liberal, y terminó por reducir los aspectos democráticos y ampliando los liberales. Monedero denomina a este fenómeno «vaciamiento democrático», lo que afecta definitivamente los derechos sociales, pero también avanza sobre los derechos civiles y políticos en función de disciplinar a los ciudadanos para recuperar las ganancias y los mercados para las grandes empresas.

El giro a la izquierda, por lo menos entre 1998 y 2015, es el tercer gran momento democratizador en América Latina. Sucede por la crisis de las transiciones que no se consolidan y es producto de grandes movilizaciones sociales en el subcontinente. Esto ocurrió desde el Caracazo venezolano en 1989 al «que se vayan todos» argentino del 2001, hasta las movilizaciones frente al desgobierno y el vacío de poder en Ecuador y Bolivia entre el 2003 y 2006. La acción colectiva que se convierte en movimiento social y después en propuesta política, así como los nuevos actores democráticos que querían entrar a una sociedad política privativa de las élites, son los que inician este nuevo momento democratizador. Un nuevo momento que pone a la región en condición de redefinir su identidad frente al reto de integrarse autónomamente en el planeta. Como se dijo sobre el momento del auge en este período, nunca desde la época de la independencia, doscientos años atrás, ha vivido América Latina un momento que le permita

perfilarse como un sujeto de contornos distinguibles y objetivos propios de cara a los otros actores de la globalización.

Empero el giro a la izquierda hoy no adquiere su verdadero significado si no se comprende que es tributario y a la vez superación de los dos momentos anteriores. Ya no es el primer populismo, porque se da en democracia y competencia política; justamente las limitaciones y el autoritarismo de algunos casos —la Venezuela de Chávez y sobre todo de Maduro— se dan por incompreensión de esta característica de la escena continental y casi mundial. Pero tampoco se parece al liberalismo de las transiciones, porque es muy claro en señalar la importancia de redefinir la política con la movilización y organización social que se traduce en la construcción de una identidad mayoritaria y el hecho contundente de que la democracia debe producir bienestar. Esto se expresa en que las distintas experiencias progresistas crean o recrean, en algunos casos, una identidad política popular que trasciende a los propios gobiernos. Lo que Ernesto Laclau (2005, 1985) denominó la construcción de un pueblo con clara conciencia de sus reivindicaciones y sus adversarios/enemigos históricos.

El dilema entonces para definir la democracia, y más específicamente cada democracia, sigue siendo el de José Nun (2000): ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?

5. El contraste: la experiencia peruana

Entre los países de América Latina donde no hubo un giro a la izquierda en las últimas dos décadas, podemos contar a México, Colombia, Chile y Perú, justamente los que en el 2009 conformaron la Alianza del Pacífico, una alianza en principio comercial a la sombra de los Estados Unidos. Pero solo en el Perú la crisis de su transición a la democracia tuvo, casi inmediatamente, una salida por la derecha con el golpe de Estado de abril de 1992. Este golpe produjo modificaciones en el régimen político, primero en dictadura y luego en democracia, que afianzaron el modelo neoliberal con una nueva Constitución hecha a la medida de los nuevos gobernantes. En México y Colombia se continuó con una política anterior, que se acentuó durante las presidencias respectivas de Carlos Salinas de Gortari, quien firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, y Alvaro Uribe, quien firmó el Plan Colombia con los Estados Unidos para renovar sus Fuerzas Armadas y la Policía, a fin de

enfrentar a la insurgencia de izquierda. El caso de Chile es el más controvertido de los señalados porque desarrolló en su momento, a fines de la década de 1980, una transición que se consideró emblemática; se recuperó la democracia con sus libertades civiles y políticas, pero se mantuvo intacto el modelo neoliberal implementado en dictadura por Pinochet. La crisis de ese arreglo también les ha llegado, pero veinticinco años después de ocurrida la transición y sin posibilidad a la vista, todavía, de que las calles aspiren al gobierno.

¿Qué hace que unos giren a la izquierda y otros afirmen el neoliberalismo? Creo que por lo menos en el caso del Perú, Colombia y México, el peso de la violencia en la interacción política va a ser decisivo. El conflicto armado interno en el Perú, que duró hasta mediados de la década de 1990, y cuyas secuelas entre otras significaron el afianzamiento de la dictadura de Fujimori y Montesinos. La larga estela de la violencia en Colombia, que tiene en el Plan Colombia un hito fundamental para la recuperación de la iniciativa del Estado. La violencia delincuencial asociada con el narcotráfico en México, que tiene el aval si no la participación del Estado en sus diferentes niveles. Estos diferentes procesos han necesitado de gobiernos autoritarios y/o democracias restringidas para llevarse adelante, los que empataban con las necesidades económicas de la propuesta neoliberal, derrotando y arrebatando la iniciativa política a sectores de izquierda que pudieran señalar un camino distinto.

El Perú, por su parte, ha pasado de la democratización casi sin democracia, que caracterizó la segunda mitad del siglo XX, a la democracia sin democratización que tenemos hoy en día. Es decir, de la movilización social y política en la lucha antioligárquica (1930-1978) por derechos y participación, que incursionó con suerte variable en el Estado y consiguió importantes reivindicaciones, a un régimen de competencia restringida que reprime el movimiento social y dificulta su conformación como alternativa política.

Este proceso ha tenido uno de los movimientos nacional populares más importantes y antiguos del continente, el APRA, con un discurso muy articulado y un líder formidable: Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero en su versión original no pudo llegar al poder, y terminó sufriendo un proceso de aguda derechización para devenir hoy día en un partido neoliberal más. Asimismo, un tardío populismo con el nacionalismo de izquierda del gobierno militar encabezado por Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975. Pero ninguno de las dos experiencias pudo calar como memoria para la construcción de una hegemonía alternativa hoy.

Además, desde la transición a la democracia de fines de la década de 1970, el país ha sufrido una progresiva derechización. Primero, con la democracia conservadora (1980-1992), producto peruano de las transiciones de la época; y luego, con la dictadura de Fujimori y Montesinos (1992-2000), salida de derecha al fracaso de la transición peruana; y, finalmente, con la democracia cada vez más restringida de la actualidad. Este proceso ha acentuado una hegemonía neoliberal que solo ha tenido oposición alternativa en la década de 1980, por lo que ha fortalecido una retórica antipolítica que califica a cualquier adversario de «antisistema» y en el extremo de «terrorista».

Así, esta hegemonía neoliberal hace *tabula rasa* de los derechos logrados en décadas anteriores y ello le da una vitalidad que no imaginamos desde la banda progresista. Es potenciada, además, por un doble hecho que la refuerza: el triunfo sorpresivo de Alberto Fujimori —el *outsider* de la época— en las elecciones generales de 1990 y el autogolpe del mismo en abril de 1992. Elecciones y golpe de Estado dejan al resto de fuerzas inexistentes políticamente y en clara minoría social. Además, esta hegemonía se construye sobre una nueva base material. Se produjo un ajuste económico en 1990 y se da un conjunto de legislaciones que transforma la economía entre 1990 y 1992. En resumen, se privatiza, concentra y reprimariza la economía, por lo que termina siendo controlada por una docena de empresas, principalmente extranjeras, y asentadas en los negocios minero, gasífero y financiero. De esta forma, de 1992 en adelante se impone, frente al fracaso de la transición a la democracia, un nuevo orden de carácter neoliberal. Este fenómeno derrota las posibilidades de cambio que venían desde la década de 1980, en contraste con los vientos que empiezan a sentirse en otros países de la región.

Empero esta hegemonía continúa construyéndose en democracia. Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y la huida de ambos del Perú, se da paso a una breve transición que regresa y no regresa al país al orden conservador de la década de 1980, porque está contradictoriamente inscrito en el respeto a la Constitución golpista, no solo conservadora sino claramente reaccionaria, impuesta por la dictadura en 1993. La realidad de este régimen político está en la gramática de su nacimiento: se trata de una democracia regida por la Constitución de un régimen autoritario. La ciudadanía recuperó algunas libertades políticas, pero no los derechos sociales conculcados. Así, las elecciones no fueron suficientes para brindar estabilidad a la democracia recuperada y las movilizaciones sociales continuaron, enfrentando una creciente represión por parte de las autoridades elegidas. Esta

segunda transición, luego de 1978, significó entonces una democracia a medias, imposible de consolidar el régimen político.

Esta democracia revela su naturaleza en una importante y creciente legislación de «criminalización de la protesta» contra los movimientos juveniles, agrarios, ambientales y magisteriales. Esto empezó con Alejandro Toledo y ha continuado con Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. La mención reiterada de los que protestan como «antisistemas», en referencia a su oposición al modelo neoliberal y su trato abierto como delincuentes, ha sido uno de los ejes de polarización política.

Esta democracia es el marco político para un período de prosperidad falaz, como señalara Jorge Basadre (1968) para otros momentos de la historia del Perú. En los años de mayor auge del modelo primario exportador (2001-2013) había un promedio de 6% anual de crecimiento, y el PBI se multiplica por dos (BCRP, 2014). Un crecimiento de la riqueza jamás visto en la historia peruana. Sin embargo, esto contrasta con un reparto absolutamente desigual de la misma. De acuerdo con la CEPAL (2011), el ingreso del 20% de la población más rica es 18.5 veces mayor que el del 20% más pobre. Asimismo, el porcentaje de la PEA que tiene trabajo con derechos, en el pico del auge exportador, se restringe para el año 2012 al 12% (Gamero, 2012) y el de los trabajadores en condiciones de informalidad al 75% de la misma. Tenemos entonces un modelo que produce una aguda desigualdad, nada recomendable para un florecimiento democrático.

El neoliberalismo, sin embargo, continuó cosechando importantes votaciones e incluso mayorías electorales, siempre con nuevos pero efectivos disfraces. Alejandro Toledo gana en el 2001, aprovechando el movimiento antidictatorial y su origen indígena —«el cholo sano y sagrado»—, y prometiendo algunos cambios en el modelo neoliberal para finalmente no hacer nada. Alan García, con un cinismo mayor, hace campaña en el 2006 desde una crítica abierta al modelo neoliberal para terminar siendo su mejor implementador. Ollanta Humala gana en el 2011 con un programa nacional popular para traicionarlo en el primer año de gobierno y dar un viraje radical al neoliberalismo. Sin embargo, las últimas denuncias, investigaciones y acusaciones periodísticas y judiciales sobre hechos de corrupción contra estos tres expresidentes, ocurridas principalmente a partir del 2016, son de tal magnitud que difícilmente se puede pensar que tengan futuro político. Por último, Pedro Pablo Kuczynski gana la segunda vuelta de las elecciones del 2016 luego de una accidentada campaña, esta vez sí con una clara identidad neoliberal.

La decepción electoral también juega un rol agudizando el desprestigio de la política y de las instituciones. En el 2015, de acuerdo con Latinobarómetro, al final del gobierno de Ollanta Humala la participación electoral era de 81%, la satisfacción con la democracia de 24%, la aprobación presidencial alrededor de 20% y la aprobación del Congreso de solo 8%. Esta tremenda brecha entre participación, satisfacción y aprobación nos da una idea de la precarización de la democracia en el Perú y del sentimiento ciudadano de decepción y de cinismo frente a la política.

Sin embargo, el espectro político consagra la hegemonía neoliberal. El Perú tiene un presidente que es directo representante del capitalismo transnacional y el Congreso es abrumadoramente controlado por una fuerza política que hizo el ajuste neoliberal de 1990, dio el golpe de Estado de 1992 e hizo aprobar al año siguiente una Constitución *ad hoc* a sus propósitos. Asimismo, gobernó al país en dictadura durante ocho años y tiene a sus principales líderes presos por haber violado sistemáticamente los derechos humanos y liderado el saqueo del Estado como nunca se había hecho en la historia republicana. La derecha transnacional versus la derecha delincuencial han dejado poco espacio a cualquier alternativa que plantee continuar con la democratización del país.

El Perú es así el ejemplo de la democracia restringida, el país en el que fracasa con más claridad la promesa de la consolidación democrática y donde se naturaliza con más éxito esta democracia a medias como una auténtica democracia representativa.

6. La crisis de los gobiernos de izquierda: entre la herencia y la voluntad

La crisis de los gobiernos de izquierda se debate entre lo que heredaron y lo que hicieron.

Los gobiernos de izquierda surgen de los movimientos sociales que se enfrentan a los ajustes económicos de los gobiernos neoliberales y su sometimiento al orden económico global a través, principalmente, de los Estados Unidos. Esta es su marca de carácter —para algunos estigma, desde la derecha neoliberal, para otros deuda, desde la izquierda alternativa— que nunca podrán saldar. Su origen les da una fuerza singular resentida desde siempre por el orden establecido, pero también supone retos que no siempre van a poder encarar con éxito. De hecho, una parte de los movimientos que los

apoyan en un primer momento señalan que, una vez ganado el gobierno, se busca subalternizarlos negando el rol protagónico que tuvieron en el origen de los mismos. Este reclamo no es general, sino que se da en determinadas coyunturas y sobre reivindicaciones generalmente económicas. Heredan, por ello, una agenda de protesta que trataran de convertir con suerte y voluntad variable en programa de gobierno y están limitados por condiciones que no siempre sabrán manejar.

En la raíz de este problema se encuentra una comprensión equivocada de la relación entre sociedad y política que en muchos casos llevó a la desconexión. Por un lado, se postula que las reivindicaciones de los movimientos sociales deben convertirse, tal cual, en políticas de gobierno; mientras que por otro, se quiere dejar de lado los reclamos sociales una vez que se alcanza el poder. Los movimientos creen que se trata de un *continuum* entre la calle y el Estado, mientras que los gobiernos se incomodan cuando desde la sociedad les reclaman por lo que consideran las promesas incumplidas. El caso es que efectivamente existe una distinción entre sociedad y política que es difícil recomodar cuando los que ganan elecciones están apoyados por el movimiento popular organizado. Esto es especialmente cierto para los gobiernos —porque les cabe a ellos una responsabilidad especial— que después de muchas décadas ganaron elecciones con la sociedad movilizadada y no pueden transformar esta relación. Ello hace que se debilite su propuesta de democratización hasta un punto en el que vuelven a enfrentar la amenaza y/o realidad del retroceso.

La relación entre los gobiernos de izquierda y los diferentes movimientos sociales dista, sin embargo, de ser uniforme. En Bolivia tenemos un gobierno que nace estrechamente ligado a los movimientos sociales, aunque tiene problemas posteriores. En Ecuador otro que tiene apoyos y oposiciones desde un inicio. En Argentina y Brasil partidos que tienen una relación histórica con los movimientos sociales, pero una permanente negociación con los mismos cuando están en el gobierno, con algunos movimientos que pasan poco a poco a la oposición. En Venezuela una oposición de la antigua organización sindical y el intento, no siempre feliz, de tener una base popular propia. A pesar de las tensiones queda, luego de quince años y más, la necesidad del vínculo y su indispensable renovación de cara al futuro, un aspecto de la política que ciertamente no está en la agenda de la derecha neoliberal.

La situación económica que encuentran es en general mala y en algunos casos terminal, producto de la entrega de los recursos naturales y los programas económicos de ajuste que no funcionaron. La situación va de

la resistencia a las consecuencias de los ajustes, del caso emblemático de Venezuela con el Caracazo a la crisis efectivamente terminal, con ejecutivos y presidentes que huyen en Bolivia y Argentina. El encontrar una situación económica tan mala es también una ventaja porque les permite llevar adelante políticas distintas y contrastar sus resultados, más o menos inmediatos, con el desastre anterior.

Estos gobiernos heredaron, asimismo, un Estado débil que no había terminado el tránsito, en diferentes grados, del Estado oligárquico a un Estado democrático. Las dificultades mayores para alcanzar el Estado democrático venían del autoritarismo de raigambre colonial en el que el orden político se construye más desde arriba y desde afuera que desde la sociedad. Un autoritarismo que ha tenido como actores en diferentes momentos a oligarcas, militares y también caudillos populares, quienes todavía se resisten, vía la repetición, a abandonar el escenario de la historia. Junto con el autoritarismo, la excrecencia de estos Estados débiles ha sido la corrupción. Es el Estado patrimonial que heredamos de la Colonia, donde no hay diferencia entre el bolsillo privado y el tesoro público. El patrimonialismo persiste a través de varias formas estatales y adquiere nuevamente lozanía, si cabe, con el Estado neoliberal, pero también se reedita con los gobiernos de izquierda.

De manera similar, la herencia de régimen político no presagiaba algo mejor. La democracia que heredan, pero a la vez contra la cual se levantan los movimientos sociales y políticos que están en el origen de los gobiernos de izquierda, es la democracia restringida producto de las transiciones. Esta era una democracia que criminaliza la protesta y busca impedir el ingreso de las alternativas populares al sistema político, por lo que la ciudadanía —y más la ciudadanía organizada— quiere ver algo distinto. Esto es lo que producen las mayorías electorales abrumadoras de los primeros años que suelen durar más de una década alentadas por gobiernos que, luego de mucho tiempo y quizá por primera vez, hacían lo que decían. Estas mayorías abrumadora no son solo mayorías electorales, sino que constituyen junto con la movilización una identidad popular con el programa progresista y el caudillo de turno, lo que se llama la formación de un pueblo (Laclau, 2011), que puede ser el colectivo social y político que haga trascender la experiencia de izquierda.

La forma de hacer política y el ejercicio del gobierno también cambia frente a la movilización popular. Se impone el pueblo movilizadoincluso a favor y en contra de los gobiernos de izquierda ya instaurados, y estos se debaten entre la autonomía, la cooptación y el enfrentamiento a la movilización.

Conforme estos gobiernos avanzan las contradicciones se agudizan, pero parece que esta dinámica de hacer política trasciende al progresismo en el poder. Paradójicamente, la derrota de estos gobiernos no termina con esta forma, tan alabada y aborrecida, de expresarse y parece que será un nuevo ingrediente en la región.

Los críticos de izquierda (Modonessi y Svampa, 2016), sin embargo, dirán que los gobiernos nacional populares no son fieles a su origen en los movimientos sociales y a la agenda emancipatoria que estos levantan. Señalarán más bien que no proponen cambios de fondo al modelo neoliberal, propician una «participación controlada» de los movimientos y carecen de «conceptos horizonte» en sus planteamientos. En otras palabras, no se constituyen en una alternativa real al capitalismo neoliberal por lo que fracasan en su cometido.

En estas condiciones de movilización social contra las políticas de ajuste y privatización, de Estado débil y corrupto, de aguda dependencia del capitalismo global principalmente de los Estados Unidos, de democracia restringida y gobierno de las élites, es que asumen los gobiernos de izquierda. Es cierto que existen dos dinámicas en los mismos. Por una parte, aquellos que tienen una perspectiva refundacional, donde se desarrollan procesos constituyentes que les permiten actuar con una nueva institucionalidad política, como es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Por otra parte, los que se mueven dentro de la institucionalidad que encuentran, como es el caso de Brasil, Uruguay y Argentina.¹ Se ha querido contraponer a unos casos con otros, sobre todo por parte de los críticos de izquierda al giro progresista, considerando que los primeros al haber cambiado la institucionalidad que encuentran pueden hacer cambios más radicales. Sin embargo, creo que cada quien trata de actuar de acuerdo con las condiciones de cada país, para poder proceder a los cambios que esas condiciones permiten.

En todos los casos, el blanco es el modelo neoliberal. Sin embargo, más allá de la retórica, en ningún caso se trata de un programa anticapitalista. Por más que en Venezuela el chavismo habla de «socialismo del siglo XXI», incluso allí se le da poco contenido a la etiqueta. En general, como ya señalamos, se busca el fortalecimiento del Estado, también como actor económico, con miras al desarrollo del mercado interno y la proyección del país a nivel regional, en bloques, para que a su vez estos integren a la región al mundo globalizado. Se trata del desarrollo de un capitalismo nacional y regional para

¹ Es justo señalar, sin embargo, que en Brasil (1989) y Argentina (1994) se habían hecho importantes reformas constitucionales posteriores a las transiciones hacia la democracia.

integrar en mejores condiciones a la región al mundo. Es cierto que existen matices, donde en un extremo está Brasil que incide más en la lucha contra la desigualdad y la pobreza y el financiamiento de derechos sociales, tocando poco el modelo mismo, pasando por Argentina que incide en el incremento del consumo y el mercado interior, Venezuela que subraya el reparto de la riqueza petrolera y postula un imaginario de socialismo comunal y que despierta tarde a la necesidad de la diversificación productiva, hasta Ecuador y Bolivia que comparten las características generales del giro pero con una prudente política macroeconómica. Tal como señala Monedero (2017), se trata de un programa posneoliberal, pero no poscapitalista.

No obstante, en ningún caso se avanza con éxito sostenido un modelo que supere la actividad extractiva de materias primas para la exportación como sector fundamental de la economía, lo que permite un auge en el momento de la subida de los precios de estas y contribuye al declive una vez que el *boom* pasa con las consecuencias del caso. La dependencia de las materias primas incluso aumenta durante el período de los gobiernos de izquierda, y en la actualidad es mayor que a fines del siglo XX (Burchardt, 2017). Nos encontramos con la paradoja, entonces, de que la expansión en términos de derechos sociales se financió, particularmente en el caso de Venezuela, con la renta (en este caso petrolera) producto de los precios altos señalados. Es inevitable por ello asociar la crisis del progresismo con un ciclo de precios bajos, un ciclo que ya empezó en el 2012, con la baja de los precios de las exportaciones de materias primas no petroleras, y que se agudiza a partir del 2014, con una baja de los precios de las exportaciones petroleras. La dificultad para encontrar una política económica que supere esta característica histórica de las economías latinoamericanas quizá sea la mayor limitación de los gobiernos de izquierda.

En lo que sí caen, al menos tres de los más importantes de estos gobiernos —Venezuela, Brasil y Argentina—, es en la corrupción. Esta cruza los tres niveles de Estado, régimen y gobierno. Históricamente vamos del Estado patrimonial que heredamos de la Colonia al régimen político, en dictadura y democracia, y a los gobiernos de izquierda mismos. Es verdad que la corrupción viene de atrás, una herencia que reciben estos gobiernos, pero también es verdad que no son eficaces en eliminarla, sino que se aprovechan de ella y en algunos casos la usan para suplir sus deficiencias en el manejo de la democracia. Es más, este uso de la corrupción por parte de quienes se suponía que eran los llamados a combatirla fue uno de los elementos de desprestigio más agudos que usó con gran éxito la derecha y que incluso hoy, luego de que algunos de

estos gobiernos han dejado el poder, sigue jugándoles en contra como un tema clave que sacan sus rivales para eliminarlos políticamente. Es importante también remarcar el papel que juegan los medios de comunicación, controlados por el orden neoliberal, en estas campañas de desprestigio; sesgan sus informaciones en desmedro de los políticos que han favorecido los cambios.

Un punto de crisis que también zamaquea a los gobiernos de izquierda es la proyección regional y mundial que pretenden y la reacción que esta causa. Desde el inicio del giro en 1998, con la llegada al poder de Hugo Chávez, es clara la proyección que estos gobiernos se plantean. Sin embargo, el tratar de variar la correlación de fuerzas a nivel latinoamericano para que las reformas señaladas tengan una proyección regional, y puedan efectivamente realizarse, toca intereses mayores que harán sentir su peso. A las iniciativas que los gobiernos de izquierda potencian, como es MERCOSUR, e impulsan decididamente en su creación, como son los casos de UNASUR y CELAC, los enemigos del giro a la izquierda —puntualmente el expresidente peruano Alan García— contestan lanzando, con el apoyo decisivo de los Estados Unidos, la Alianza del Pacífico en el 2009, que agrupa a Chile, Perú, Colombia y México. La Alianza del Pacífico reniega de la integración regional y asume como propósito central el desarrollo de la relación unilateral, de cada uno y quizá del nuevo bloque, con los Estados Unidos. De esta manera, la Alianza del Pacífico es la continuación del proyecto del ALCA, que fuera derrotado en Mar de Plata el 2005, pero que se mantiene como el eje de la política de los Estados Unidos hacia América Latina. La Alianza del Pacífico, a pesar de su endeblez como proyecto económico y comercial, significa un duro golpe político para los esfuerzos de integración regional que no parece, a pesar de su continua irrelevancia, haberse superado hasta el día de hoy.

Vemos entonces que la democracia, la economía, la corrupción y la integración son los temas sustantivos que van a llevar a la crisis a los gobiernos de izquierda.

El pueblo movilizado que produce las abrumadoras mayorías electorales de los primeros años se queda como base de apoyo y no pasa a tener una mayor participación en dos aspectos que permitirían acotar la democracia de élites: el control de la representación política y la participación directa o semidirecta en mecanismos de toma de decisiones, sobre todo a nivel local y regional. Las mayorías electorales van sufriendo así un progresivo desgaste, a la par que se deteriora también esta nueva forma de expresión política que es la movilización. Aquí es central la figura del caudillo, de un indudable con-

tenido positivo como factor simbólico de liderazgo para el proceso de transformación, pero que a la postre si se perenniza —sobre todo por la vía de la reelección— puede terminar siendo un lastre para la democratización. No es fácil producir este cambio en términos democráticos, porque los adversarios de derecha, al ver que se quiere cambiar la dinámica de la competencia entre élites por el pueblo movilizado y la participación más directa, denuncian inmediatamente el asunto como «dictadura de mayoría», incluyendo en ello a la movilización y al caudillo. Esto lleva a una polarización política que todavía no ha encontrado salida en ningún país de la región.

La polarización es inevitable por los objetivos transformadores que se pretenden, los cuales afectan un conjunto de intereses establecidos que provocan una reacción de los actores afectados. Esta reacción, que en el pasado estuvo a la raíz de muchos golpes militares, se traduce hoy en la formación de coaliciones sociales y políticas que en la mayor parte de los casos cuentan con el aval —si no la ayuda— de los Estados Unidos y que, desde un primer momento, se oponen a las transformaciones. Pero la polarización pasa de favorecer los cambios a crear una situación política complicada con el avance del proceso que suele tentar a las clases medias, muchas veces favorecidas por las políticas del progresismo, así como a sectores moderados a una alianza con los opositores de derecha a las reformas. La metodología de la reacción suele ir de la participación electoral al «golpe blando», donde se articula de acuerdo con la situación el golpe parlamentario, la movilización de los desafectos, el desabastecimiento de productos esenciales, el ahogamiento financiero y el ejercicio de la violencia selectiva, etc. De esta manera, se convierte en un reto formidable para los gobiernos de izquierda mantener las reglas del pluralismo político y continuar a la vez con el proceso transformador.

La corrupción, en cambio, es una verdadera derrota para la izquierda y los movimientos nacional populares que llegaron al gobierno, una derrota de la cual tendrán que dar cuenta corrigiendo las prácticas que llevaron a ella y señalando los factores estructurales del Estado y el régimen político que la propiciaron. Sin embargo, en lo inmediato las denuncias de corrupción mantienen a las fuerzas progresistas a la defensiva. Mientras estas no deslinden políticamente y hagan creíble una autocrítica sobre el punto, difícilmente van a poder retomar la iniciativa política.

La crisis se debe entonces a la herencia recibida y pobremente transformada en función de los objetivos programáticos levantados, así como a la falta de creatividad y profundización en los cambios económicos y democráticos

que permitieran unos países y una región con bienestar e independencia nacionales, y un mayor involucramiento de los ciudadanos en las decisiones que les competen.

7. ¿Contraste y fin de ciclo?

En el contraste, tenemos el más grande intento por democratizar América Latina desde que esta existe como entidad diferenciada en el planeta. Los principales países en extensión, población y PBI han estado inmersos en el proceso de señalar un camino económico, social y político distinto para la región. Esto ha sucedido junto con una voluntad de integrarse autónomamente, a contrapelo de los tratados de libre comercio, al mundo. Empero, ha sido una acción que ha tenido enormes dificultades para lidiar con su herencia, mantener su articulación con los movimientos sociales que le dieron origen, desarrollar las políticas adecuadas en los planos económico y democrático, y a la vez enfrentar a los enemigos internos y externos cuyos intereses necesariamente tenían que afectar.

Frente a este intento de democratización, existen países que también han ido de la dictadura a la democracia de élites, pero sin intentar romper sus lazos de dependencia con los países desarrollados, especialmente con los Estados Unidos, ni cambiar su modelo económico. Este es el caso emblemático del Perú, el que con sus cifras de gran crecimiento en contraposición con la falta de empleo, la desigualdad y la desinversión le señala un futuro magro a quien siga sus pasos.

Sin embargo, nos encontramos en un cruce de caminos, en donde el intento de democratización está relativamente parado y no parecen tampoco en la otra banda haber propuestas viables. Casi todo indica, por los resultados políticos habidos a partir del 2015, que se trata de una crisis. El asunto es ver si esa crisis se convertirá en el fin del ciclo izquierdista en la región. Como señalé al principio, lo que está en juego en esta crisis es el tipo de democracia que se construirá en América Latina hacia el futuro. ¿Será una democracia restringida basada en el modelo neoliberal, como la que tenemos hoy en el Perú, o será una democracia avanzada que honre a las mayorías electorales e impulse la participación de la población, como la que se ha tratado de construir en los últimos casi veinte años en la región? En cualquiera de los dos casos, creo que vamos a un momento cualitativamente distinto del anterior.

¿Podemos llamar a estos gobiernos, que formaron parte del giro a la izquierda, populistas? Si fuera solo cuestión de nombres, no valdría la pena detenerse en este punto. Sin embargo, los medios de comunicación de derecha han logrado hacer del término populismo un insulto para denigrar a cualquier gobierno que no siga los dictados neoliberales, por lo que es importante aclarar la cuestión. Al respecto, estos medios entienden populismo como una conducta de ejercicio demagógico e irresponsabilidad política por parte de un líder y sus seguidores, por lo que se la achacan a cualquier personaje de estas características, sea de izquierda o de derecha, en cualquier parte del mundo. Este perfil tiene, desde este enfoque, una necesaria deriva autoritaria que constituiría «el mal de nuestro tiempo» (Vargas Llosa, 2017).

A diferencia del uso mediático, en el presente trabajo he concebido a los gobiernos de izquierda como aquellos que han levantado un programa de transformaciones sociales, económicas y políticas en democracia, que buscaban el bienestar de la mayoría de la población, promoviendo los derechos sociales y la independencia nacional de sus respectivos países. Han desarrollado, asimismo, por los menos entre promesas electorales y ejercicio de gobierno, una consecuencia muy significativa entre lo que se dice y lo que se hace, estableciendo de esta forma otro contenido ético para su actividad. Estos movimientos han generado también líderes importantes, más o menos similares al caudillo latinoamericano clásico, que han sido fuente de éxitos al encarnar la propuesta, pero también de problemas especialmente cuando se han querido perennizar en el cargo.

Es indudable que estos gobiernos de izquierda heredan rasgos sustantivos del populismo latinoamericano de la época de la lucha antioligárquica, compartiendo el afán de democratización social del mismo y su lucha por la independencia nacional. Sin embargo, en el caso de los gobiernos últimos, se trata de una promoción de la democratización social en un marco de democracia política y de una lucha por la independencia nacional en la época de la globalización neoliberal, claramente distinta a la Guerra Fría, y muy lejos, ciertamente, de la perspectiva autoritaria que se pretende endilgarles.

Pero, en cualquier caso, creo que lo más probable es que se marcha hacia un fin de ciclo: el del giro a la izquierda en América Latina. Un fin de ciclo que deja retos inéditos porque nunca, desde la independencia de las potencias europeas en el siglo XIX, la existencia y la identidad de nuestra América como región autónoma en el mundo ha estado en disputa como en las últimas décadas. Es más, en esta disputa ha quedado claro que existe un planteamien-

to económico y político alternativo que, más allá de las limitaciones que haya podido tener, se ha mostrado posible y con un importante contingente ciudadano, durante muchos años mayoritario, que lo ha respaldado. Queda por ver si este contingente ciudadano se puede constituir en un pueblo que asuma identidad con lo planteado y lo logrado, y si ha desarrollado la capacidad para ponerlo en acción nuevamente en el futuro.

Bibliografía

- Arato, A. y Cohen, J. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: MIT Press.
- Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2014). *Estadísticas de la economía nacional en el Perú*. Recuperado de <http://estadisticas.bcrp.gob.pe> (consulta 26274201415250).
- Basadre, J. (1968). *Historia de la República del Perú. 1822-1933* (vols. I, III, IV, V, X y XII). Lima: Editorial Universitaria.
- Bobbio, N. (1992). *Liberalismo y democracia*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Bottomore, T. (1992). Citizenship and social class, forty years on. En T. H. Marshall y T. Bottomore (Eds.). *Citizenship and Social Class* (pp. 53-93). Londres: Pluto Press.
- Burchardt, H.-J. (2017). La crisis actual de América Latina: causas y soluciones. *Nueva Sociedad*, 267, pp. 114-128.
- Collier, R. (1999). *Paths Towards Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2011). *La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir*. Lima: CEPAL, CIEPLAN.
- Franco, C. (1998). *Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina*. Lima: Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. Nueva York: The Free Press.
- Gamero, J. (2013). *El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2012*. Lima: PLADES, IESI.

- Gamero, J. (2012). *El trabajo decente en el Perú. Una mirada al 2011*. Lima: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Centro Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, Programa Laboral de Desarrollo.
- Germani, G. (1965). *Política y sociedad en una época de transición*. Buenos Aires: Paidós.
- Huntington, S. (1991). *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman y Londres: University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven y Londres: Yale University Press.
- Laclau, E. (2011). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Latinobarómetro, Corporación (2015). *Informe 1995-2015*. Banco de datos en línea. Recuperado de www.latinobarometro.org.
- Linz, J. y Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lynch, N. (2009). *El argumento democrático sobre América Latina. La excepcionalidad peruana en perspectiva comparada*. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Lynch, N. (2000). *Política y antipolítica en el Perú*. Lima: DESCO.
- Lynch, N. (1992). *La transición conservadora. Movimiento social y democracia en el Perú 1975-1978*. Lima: El Zorro de Abajo Ediciones.
- Mainwaring, S. y Pérez Liñán, A. (2013). *Democracies and Dictatorships in Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Monedero, J. C. (2017). La democracia agredida. Populismo, posdemocracia y neoliberalismo. *Nueva Sociedad*, 267, pp.142-155.
- Nun, J. (2000). *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- O'Donnell, G. (2010). *Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- O'Donnell, G. (1982). *El Estado burocrático-autoritario: 1966-1973. Triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- O'Donnell, G. y Schmitter, P. (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore y Londres: John Hopkins University Press.

- Portantiero, J. C. y De Ípola, E. (1981). Lo nacional popular y los populismos realmente existentes. *Nueva Sociedad*, 54, pp. 7-18.
- Quijano, A. (2011). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Edgardo Lander (Comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). Buenos Aires: Ediciones Ciccus, CLACSO.
- Reid, M. (2009). *El continente olvidado. La lucha por el alma de América Latina*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Sandbrook, R. (2014). La izquierda democrática en el sur del mundo. *Nueva Sociedad*, 250, pp. 42-57.
- Vargas Llosa, M. (5 de marzo del 2017). El nuevo enemigo. *La República*. Recuperado de <https://larepublica.pe/domingo/1020758-el-nuevo-enemigo>.
- Vilas, C. (1995). El populismo o la democratización fundamental de América Latina. En C. Vilas (Comp.). *La democratización fundamental* (pp. 11-118). México D. F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Weber, M. (1979). *Economía y sociedad*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Weyland, K. (2013). The threat from the populist left. *Journal of Democracy*, 24 (3), pp. 18-32.